

Gobernantes de medio siglo

Damos cabida a una visión periodística de la política de medio siglo (1910-1960) de que es autor René Silva Espejo y que apareció en "El Mercurio" con ocasión del 18 de septiembre de este año y que a pedido de la Dirección de los Anales de la Universidad de Chile, su autor reseñó y completó para nuestra revista. El trabajo fue redactado por su autor, apelando más que a documentos, a su visión personal de los acontecimientos que le ha tocado seguir, o comentar en su larga carrera periodística. El autor desempeña el cargo de Subdirector del diario mencionado y en él redacta, desde hace largo tiempo, la sección dominical titulada "La Semana política".

Al abarcar un período de cincuenta años en la política nacional no se pretende hacer historia de los sucesos, sino trazar un panorama de la evolución y tendencias que el país ha experimentado bajo la dirección de los distintos gobernantes que pasaron por La Moneda en este medio siglo.

El carácter de síntesis que asume esta crónica explica que en ella se omitan nombres y fechas, y que sólo se destaque la línea más general de los acontecimientos y dentro de ellos se inscriban ciertos sucesos que caracterizan a cada administración.

Lo primero que hay que definir es si resulta arbitrario englobar los cincuenta años (1910-1960) como un período característico de la política chilena. A nuestro juicio es lícito hacerlo. A pesar del aire antañón y descolorido que ofrece la Presidencia de D. Ramón Barros Luco, no disipado enteramente por su sucesor, D. Juan Luis Sanfuentes, es un hecho que al completarse el primer centenario de nuestra vida independiente el país comenzó a experimentar ansiedades propias del comienzo de una nueva etapa social y política.

Las inquietudes que comenzaban a invadir la sociedad chilena, si tuvieron algún origen, era el movimiento social que entonces se iniciaba y que la guerra de 1914 aceleró, haciendo llegar hasta los remotos con-

finés americanos una onda de aspiraciones populares y de acicateado progreso.

La elevación al mando de don Ramón Barros Luco se originó en el temor al cambio. Los partidos que se reunieron en Convención para elegir al sucesor constitucional de don Pedro Montt tuvieron en su mano haber designado a un elemento joven y progresista como don Agustín Edwards Mac Clure, que reunió el 49% de los sufragios. Pero, al término de muchos titubeos, entre él y otro político de vieja cepa se decidieron por elegir unánimemente a quien representaba la mayor seguridad de quietismo en la dirección del Gobierno: don Ramón Barros Luco.

El desencadenamiento de la primera conflagración coincidió con la exaltación al mando de don Juan Luis Sanfuentes, que representaba mayor personalidad, pero un espíritu semejante al de su antecesor. Los historiadores han coincidido en alabar el tino con que el Mandatario supo mantener la neutralidad de Chile durante la guerra, a la que se atribuye que nuestro país no sufriera trastornos y pudiera seguir vendiendo el salitre, sin marca de contrabando bélico.

La Administración Sanfuentes siguió significando el predominio de lo político sobre lo social. El Gobierno y los partidos continuaron girando alrededor de combinaciones parlamentaristas y de cambios ministeriales, mientras en el subsuelo nacional se oía un sordo bullir de aspiraciones insatisfechas. Mientras en los pasillos del Congreso y de La Moneda los partidos clásicos acechaban la oportunidad de un voto de censura o de una Cartera en el Gabinete, se hacían presente en la vida industrial y obrera las agremiaciones en resistencia y los primeros partidos populares, incluso el que debía transformarse después en Comunista (Partido Socialista Obrero). Las fuerzas del Partido Demócrata, aportaban al tablero político un elemento de extracción artesanal.

Durante la Administración Sanfuentes

se dictó la ley de Instrucción Primaria conquistada reclamada por todas las fuerzas liberales del país y que había originado debates durante largos años. Esa reforma debe figurar en la portada del movimiento de avance social que daba patentes manifestaciones de su fuerza.

INTERPRETE DEL MEDIO SIGLO

Los anhelos de cambio golpeaban a las puertas de una organización jurídica broquelada en normas recias como murallas coloniales, pero a las que el tiempo había agrietado visiblemente. El país llegó a las postrimerías del Gobierno de Sanfuentes con un ambiente tenso y agrupaciones de fuerzas políticas que presagiaban un duelo, planteado por primera vez en torno de cuestiones sociales. La idea liberal, levantada hasta ayer como expresión de garantías electorales o reformas laicistas, adquiría un nuevo contenido, que nadie se atrevía a definir con precisión y audacia. Ayudaba a confundir los espíritus la circunstancia de que el propio liberalismo aparecía dividido, compartiendo sus fuerzas una fracción con los conservadores y otra con los radicales.

Para tomar en sus manos este último estandarte lucharon en la Convención de la Alianza Liberal don Eliodoro Yáñez y don Arturo Alessandri. A la luz de su formación aquél tenía más título para hacerlo, por haber salido de la clase media y ser promotor de ideas reformistas en su propia tienda; pero su cuño, excesivamente jurídico, no se avenía con el aire de fronda que soplaba sobre el país. Fue aventajado por Alessandri, proveniente de educación y de formación conservadoras, pero con la vibración y el poder intuitivo para captar la necesidad de cambio y colmarla con audacia. La Convención le entregó la responsabilidad de disputar a la poderosa Unión Nacional liberal-conservadora la Presidencia de la República.

Con el triunfo de Alessandri y su llegada al Poder comienza genuinamente el medio siglo, represado durante el decenio anterior por la supervivencia de fórmulas políticas ausentes de la realidad social.

Ocurrió con Chile lo que suele pasar con los individuos que retrasan en su existencia las etapas y tienen, andando los años, una recuperación tormentosa.

Fue infortunada coincidencia que la elección del nuevo Presidente no coincidiera con una paralela renovación del Poder Le-

gislativo, planteando ello un prolongado conflicto, en el cual Alessandri probó su ímpetu de luchador, aunque esterilizando buena parte de sus capacidades de acción.

El programa del "Chile Nuevo", que se anunció en 1920 y que destacaba grandes reformas sociales, quedó virtualmente postergado ante la resistencia política.

La derivación de la lucha de Alessandri con el Senado fue la campaña de reforma constitucional, a fin de dar un golpe al régimen parlamentario y establecer el Ejecutivo fuerte que entrevió Balmaceda en sus sueños revolucionarios.

La postergación obligada de la reforma social y la absorbente lucha política provocaron un desdoblamiento de la personalidad de Alessandri: el jurista pugnaba por buscar los rumbos de la legalidad para encaminar al país hacia instituciones compatibles con su tiempo; y el revolucionario se impacientaba y clamaba a través del país para arrasar con los obstáculos que oponían a su labor. Esta pugna psicológica interna debe tenerse en consideración para explicarse las aparentes contradicciones de su temperamento personal y de su obra presidencial. También ella nos ayuda a entender por qué en las confusas horas de 1924, el Presidente se sintió identificado con las aspiraciones de la oficialidad joven del Ejército que inició un movimiento de insurrección inconfundiblemente dirigido contra el Congreso, no como institución, sino como bastión de una mentalidad que no coincidía con el sentir de la mayoría nacional. Ese paralelismo psicológico puede también explicar por qué Alessandri no pudo jamás permanecer como un profesional de la revuelta, pugnando, cada vez que el desborde se hacía presente, por la restauración de la norma jurídica.

FIN DEL PARLAMENTARISMO

La revolución de 1924 puso en práctica las reformas sociales que Alessandri había elaborado y que la oposición política parlamentaria mantenía en suspenso. Si bien ellas fueron leyes del Congreso, no reflejaron su sentir mayoritario. Fueron úkases revolucionarios que dieron en tierra con las Cámaras y con el régimen a que ellas estaban asociadas.

Si el movimiento que hizo regresar a Alessandri a la Moneda, en 1925, no hubiera existido, el país habría seguido, quizás por cuanto tiempo, en la era de los golpes militares y de la anarquía. La elaboración

y promulgación de la Constitución Política de ese mismo año fue una carrera contra la disolución que se avecinaba. La concepción íntegra de la reforma estaba en la mente del estadista y contaba con la aprobación de la mayoría de los chilenos. Los que hicieron reservas al plebiscito que precedió a la aprobación de la Carta Fundamental de 1925, creyendo que no era el medio de ponerla en vigencia, desconocían el verdadero sentir del país, que repudiaba honda y sinceramente el parlamentarismo que había detenido su progreso y lo había arrojado en la ruptura institucional.

Coetánea con la reforma constitucional fue la separación de la iglesia y del Estado, que el Presidente Alessandri debía obtener a través de una negociación hábil y secundada con gran espíritu público por el entonces Arzobispo de Santiago D. Crescente Errázuriz.

DICTADURA LEGAL

Cumplida esta obra, Alessandri se alejó nuevamente del mando convencido de que a pesar de haber mostrado al país el cauce de la legalidad, ésta no podía recuperarse en esos momentos, debido a que la perturbación revolucionaria seguía estimulada por la acción ilegal de los cuerpos armados.

En los azarosos días de la revolución de 1924, ocupó el mando el general don Luis Altamirano, como Presidente de facto; para facilitar el regreso de Alessandri, lo reemplazó, en el mismo carácter, don Emilio Bello Codesido: al retirarse Alessandri, en 1925, ocupó transitoriamente el cargo don Luis Barros Borgoño, antiguo contendor del caudillo del año 1920, quien se empeñó en restaurar la normalidad, en un esfuerzo que resultaría baldío.

Las elecciones de 1927 se desarrollaron bajo el signo de la dictadura legal, siendo elegido Presidente de la República don Emiliano Figueroa Larraín que —extraña paradoja— representaba la psicología y la mentalidad de 1910. Su personalidad no se avenía con los tiempos ni menos con el tutelaje permanente que mantenían sobre el Gobierno los elementos de las fuerzas armadas a través del entonces coronel don Carlos Ibáñez, Ministro de Guerra desde el golpe del 23 de enero de 1925. Su renuncia se produjo antes de dos años de gobierno y en 1927 ascendió al mando, en comicios sin contendor, el jefe visible del movimiento militar.

Ahí continuó la dictadura legal que pudiera llamarse "en forma". El país vería, a lo largo de cuatro años, todas las actuaciones propias de un Gobierno legítimo, pero sin que éste existiera. Basten para configurar el carácter del régimen que presidió Ibáñez, la formación de un Congreso sin elecciones, llamado "termal"; la reorganización por decreto de las Cortes de Justicia, y la supresión discrecional de las garantías constitucionales.

La virtual desaparición de la vida cívica significó eliminar elecciones libres para designar al Parlamento, por arreglos entre el Jefe del Estado y los partidos, desprestigió profundamente a éstos. Personalidades políticas vigorosas se alejaron de ellos y las juventudes no sintieron interés por ir a asambleas mediatizadas por el influjo absorbente del Gobierno. Esta especie de orfandad cívica sería de lamentables efectos morales y espirituales, porque dejó a los partidos históricos sin sangre nueva y empujó a las nuevas generaciones a la inercia o al desvarío político.

Basta mirar hacia la Europa de esos años, donde había crisis del sistema democrático y boga del fascismo, para comprender la facilidad con que cundió en Chile el desafecto a la política moldeada en partidos clásicos, cuyos programas habían quedado atrás de los fenómenos sociales que se estaban presenciando.

PERIODO DE TANTEO Y ANARQUIA

La opinión nacional, cansada de casi siete años de incertidumbre y decepciones, comenzó a organizarse en contra de la dictadura legal, acusándola de abusos y crímenes y de haber trasgredido la Constitución y la ley, dejando en el olvido las normas de depuración moral que había pregonado. No bastó para contrarrestar ese clamor la realidad de la tarea administrativa del primer Gobierno de Ibáñez (reestructuración de los servicios de Hacienda, restablecimiento del padrón de oro, obras públicas importantes, arreglo del conflicto de Tacna y Arica, y una Reforma Educacional que estaba en curso). El país se sacudió de la dictadura el 26 de julio de 1931.

De inmediato la voz de orden fue: reconstituir el Gobierno legal, con elecciones libres. Para esta tarea fue llamado al Poder don Juan Esteban Montero, mentalidad esencialmente jurídica, con un patrio-

tismo sereno, que le permitía captar el sentido del bien público, pero no luchar por él con tenacidad y ardor. La condición psicológica de este Mandatario, de sentirse sometido a ejercer el mando por voluntad de los pueblos, sin desearlo, trascendió pronto a las capas populares difundiendo la idea de que no lucharía para aplastar insurgencias.

El rastro de los cuartelazos no estaba borrado. Durante la gestación del nuevo gobierno había estallado una sublevación en la escuadra. A pocos meses de ejercer su cargo el Presidente constitucional, se produjo una sublevación en la guarnición de Santiago, con actuación de civiles complotados, la que causó el derrocamiento del señor Montero, quien se retiró dignamente, sin ofrecer resistencia, a quienes volvían otra vez a golpear en la puerta de La Moneda con la empuñadura de la espada.

En sucesión deprimente siguieron cambios en el Gobierno de facto, que pasó de manos del coronel don Marmaduque Grove a las del político y periodista don Carlos Dávila. Esta mezcla de civiles y hombres de armas respondía al intento de revivir los días de 1924, empujando al país a un cambio de régimen. República Socialista se llamó aquel intento que fluctuaba entre el polo fascista y el polo socialista. Los cien días que duró este ensayo fueron de franca anarquía, puesto que los que ejercían el Gobierno no podían dormir tranquilos, esperando a cada momento la irrupción de nuevos cuartelazos.

La paciencia pública fue menos durable en esta oportunidad. A lo largo del país comenzaron movimientos que las fuerzas no pudieron reprimir: civilismo auténtico surgió en las provincias y fue interpretado por unidades militares que pidieron la vuelta a la normalidad. Bastó esta advertencia para que el Gobierno de la República Socialista expirara. Contribuyó a franquear la recuperación el entonces general don Bartolomé Blanche, quien reclamó la presencia en el mando del Presidente de la Corte Suprema, don Abraham Oyanedel.

UN CUARTO DE SIGLO DE CONSOLIDACION

Así como los ríos desaparecen al tropezar con un desierto y después de un largo recorrido emergen con su caudal primitivo, el país vio restablecerse rápidamente la vida constitucional soterrada por varios años,

con el sólo intermedio de normalidad de la Administración Montero. Llamado a elecciones, se levantaron varias candidaturas, pero la que se impuso con gravitación natural fue la del Presidente Alessandri, que así volvía al mando para escribir la portada de un nuevo cuarto de siglo de consolidación legal y constitucional.

Si hay hecho que no requiera de sutiles interpretaciones, es éste del regreso de Alessandri a La Moneda, al término de la dictadura legal y de la anarquía. Era el político de experiencia más madura y de liberalismo más auténtico que en esos instantes se encimaba sobre las ruinas político-económicas de la crisis que agobiaba a Chile, en parte por el desorden interno y en parte como reflejo de la catástrofe que había comenzado en 1929 en los Estados Unidos.

Alessandri había demostrado su espíritu avizor para adelantarse a dar al país las instituciones jurídicas y sociales capaces de encauzar las ansiedades del pueblo y evitar convulsiones sangrientas. Ahora debía mostrarse capaz de fundamentar el régimen económico, averiado por tantos ensayos sin acierto y por el destructor efecto de la crisis sobre las exportaciones. No siendo economista y aun jactándose de no interesarse por estas materias, el Presidente dio muestra de saber cómo podía afrontarse esa ciclópea labor, llamando a su lado a D. Gustavo Ross, hombre de negocios, financista de éxito internacional, aunque completamente ajeno al mundo de la política.

Este mundo se sintió sorprendido por la elección. Aun en los propios partidos que acompañaban a Alessandri, se dejó oír el murmullo de descontento. Llegó el señor Ross a hacerse cargo de la falencia fiscal, en medio de un ambiente de reserva y de crítica, que debía acompañarlo hasta el término de su labor, en la que encontró oportunidad de disgustar a tirios y troyanos, con tal de realizar su programa de restauración del crédito internacional, estabilización de la moneda y reorganización de las industrias básicas de exportación.

En corto plazo el país comenzó a salir de la enemía económica y con ello a fortalecerse el proceso productor, pudiendo el Presidente Alessandri emprender importantes realizaciones. Para todas ellas la llave maestra, el presupuesto nacional, estaba en manos del Ministro de Hacienda, quien decidía con rapidez, afirmativa o negativamente, lo que se podía hacer. Esto acarrió al señor Ross alguna gratitud y numerosas malquerencias. De todos modos, se fue per-

EL FRENTE POPULAR

filando en él la personalidad de un gobernante firme y previsor.

Con su concurso se reorganizó la industria salitrera, dándole participación al Fisco en sus utilidades en vez del viejo sistema del derecho que sólo había conseguido diezmar la industria y no prevenir nada en materia de renovación y mejoramiento de sus instalaciones. La explotación del cobre fue regulada, reservándose para el Fisco, a través de cambios preferenciales, una participación de importancia. Se sometió a nuevo régimen la industria eléctrica privada, con el ingreso de representantes fiscales en su directorio y nació, entonces, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educativos, de fecunda labor para el desarrollo de la enseñanza pública.

El Presidente Alessandri, rodeado de colaboradores diligentes, pudo confiar en la buena marcha administrativa. Y lo necesitaba, porque las luchas políticas y los sobresaltos constitucionales no habían concluido. En el trato con los partidos se presentaron algunas dificultades que el sabio político supo resolver, pudiendo contar, hasta muy cerca del fin de su segundo mandato, con el apoyo de conservadores y liberales y, parcialmente, de radicales y demócratas. En más de una oportunidad hubo de adoptar drásticas medidas para sofocar intentos revolucionarios que trataban de buscar el alero de los cuarteles, siendo su eco cada vez menor.

Lo más grave fue el aplastamiento del motín nacional-socialista, emprendido por unos centenares de jóvenes afiliados al nuevo partido de ese nombre, que reproducía en criollo el nombre y los símbolos de los partidos que entonces imperaban en Italia y Alemania, enrolando a profesionales, estudiantes y en general a juventud desorientada por los largos años de anarquía política y dictadura militar.

El Jefe del Estado procedió con energía, aunque nunca dio las órdenes extremas que puso en práctica el jefe superior de carabineros, que ante el temor de que sus efectivos fracasaran en la represión de una asonada junto al Palacio de Gobierno, procedió a liquidar a sangre y fuego la ocupación del Seguro Obrero. El señor Alessandri no vaciló al asumir la plena responsabilidad de las medidas adoptadas para mantener el régimen constitucional.

Las fuerzas de extrema izquierda se habían reorganizado durante la Segunda Administración de Alessandri y atraían hacia su campo al radicalismo, que en la parte final de este Gobierno experimentó rupturas internas. Desde Francia venía el eco del recién formado Frente Popular, en que se unían bajo una hábil consigna de Moscú, todas las fuerzas llamadas "progresistas". Pronto el clisé fue aplicado en Chile, iniciándose la formación de un bloque destinado a elegir un Presidente radical, apoyado por comunistas, socialistas y demócratas. Ayudó a fraguar esta combinación la neta decantación de la derecha, que lanzaba la candidatura del ex Ministro de Hacienda don Gustavo Ross. El oponente fue D. Pedro Aguirre Cerda, profesor y abogado de la ala derecha radical, que gozaba de prestigio popular y que había sido uno de los más próximos colaboradores de Alessandri en su Primera Administración.

La campaña presidencial se desarrolló con violencia populista apareciendo a través de ella formaciones uniformadas, socialistas y nacionalistas. Emergió como tercer candidato de este último sector el ex Presidente Ibáñez. El luctuoso levantamiento del Seguro Obrero fue un factor electoral favorable al Frente Popular, pues determinó el retiro de la candidatura de Ibáñez y el apoyo de sus elementos a Pedro Aguirre Cerda.

Una de las más reñidas elecciones se definió con el triunfo del candidato radical por una leve mayoría, que alcanzó a crear vacilaciones por algunas horas, pero que el Presidente Alessandri se apresuró a disipar al reconocer oficialmente la elección del contendor del ex Ministro Ross.

El país, que se preparaba para acontecimientos de corte revolucionario, fue absorbido, a comienzos de esta presidencia, por el drama del terremoto de Chillán que ocasionó varias decenas de miles de muertes y asoló cuatro provincias. Este suceso inesperado cambió el rumbo del Gobierno, que en vez de quedar entregado a los desvaríos comunistas-socialistas debió concentrar su atención en la reconstrucción. Se crearon al efecto las Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio y de Fomento. El último de estos organismos debería ser la palanca para desarrollar nuevos planes industriales. Pronto la guerra dejó al país ante restricciones graves de aprovisionamiento exterior, que justificaron proyectar nuevas fábricas

para reemplazar lo que no se importaba. Esta labor se coordinó en torno de la Corporación de Fomento, que además comenzó a proyectar industrias pesadas y explotaciones estatales como la energía y el petróleo. Este plan se avenía además con la iniciación de nuevos sistemas de financiamiento, de Gobierno a Gobierno.

Los avances en el campo de la economía no guardaron paralelismo con la Administración del Frente Popular. Los servicios públicos invadidos por personal sin experiencias entraron en franca desorganización; se acusó además un frecuente abandono de la fiscalización en el manejo de los recursos públicos y todo ello trajo rápido desprestigio para los elementos socialistas en particular que habían crecido de manera explosiva, incorporando junto a intelectuales e idealistas, a un apreciable volumen de elementos de muy disímil clasificación.

D. Pedro Aguirre Cerda concedió marca de importancia al desarrollo de la educación, a la que había dedicado gran parte de su existencia y en materia internacional su iniciativa más importante fue la delimitación de las posesiones antárticas de Chile. Desapareció dos años antes de cumplir su mandato, dando ello lugar a una elección presidencial en que se disputaron el cargo el político radical D. Juan Antonio Ríos y el ex Presidente Ibáñez, que reapareció en el panorama político, esta vez apoyado por los partidos de derecha, excepción hecha de una fracción liberal que adhirió a la candidatura Ríos.

La composición de fuerzas con base radical era distinta de la que formó el Frente Popular. Esa bandera fue barrida por el prematuro desprestigio y por el carácter del candidato radical que no se avenía a pactar con el comunismo. Este sin embargo, terminó por darle sus votos, junto con los socialistas y democráticos y el sector liberal que encabezó el ex Presidente Alessandri, a cuyo discurso, en vísperas de los comicios, se atribuyó gran influencia para decidir el triunfo de D. Juan A. Ríos, en 1942.

GOBIERNO DE CENTRO-DERECHA

La Administración que acababa de instalarse debió afrontar el grave problema de decidir la posición de Chile frente al conflicto mundial, que llevaba ya dos años de desarrollo. El Presidente se inclinaba a la neutralidad, siguiendo la tradición del año 1914. Era difícil, por otra parte, contrarrestar la opinión pro aliada que en este caso

tenía de su lado a toda la izquierda por la lucha entre Alemania y Rusia, y también complicado desatender el llamado de Estados Unidos. Alguna declaración imprudente del Departamento de Estado ayudó quizás a complicar más el asunto. Por fin, Chile, rompió su neutralidad y dio apoyo a la causa aliada.

El proceso económico se dificultó seriamente debido a la suspensión del comercio con Europa y el debilitamiento del intercambio en general. Chile, como exportador de cobre, tenía influjo decisivo en los materiales bélicos. No supo, sin embargo, valorar esta posición y aceptó congelar el precio de este metal, ilusionado por los volúmenes de venta, pero sin reparar en que con ello se privaba de acumular reservas de divisas que después le harían gran falta. Transitoriamente el Banco Central dispuso de ellas en cantidad, porque las importaciones estaban detenidas y ahí adquirió velocidad un proceso de desvalorización monetaria, que había comenzado a insinuarse en la Administración Aguirre Cerda, pero que ahora vino a ser la inflación misma. Grandes emisiones contra dólares hechas con el Banco Central para financiar los desembolsos e inversiones fiscales le dieron el primer estímulo a este maligno fenómeno.

El Gobierno de Ríos, a diferencia del de Aguirre Cerda que proclamaba que "Gobernar es educar", difundió la idea de que "Gobernar es producir". Consecuente con ella creó el Ministerio de Economía, que fuera de buenos propósitos, muy poco pudo realizar: en cambio dio expansión al intervencionismo estatal, con fijaciones de costos y precios y manipulaciones del valor de las divisas, que repercutieron perjudicialmente sobre la agricultura y favorablemente sobre otros negocios industriales. Percatándose del desequilibrio, el Presidente Ríos elaboró un Plan Agrario, que aparecía como el germen de una política de fomento y también de reformas de la tenencia de la tierra, plan que quedó sin ejecución. Durante su Gobierno se comenzó a construir la usina de acero de Huachipato, y a investigar las existencias de petróleo.

EL COMUNISMO FUERA DE LA LEY

La muerte prematura del señor Ríos, en 1946, colocó al país ante una nueva elección presidencial.

La disgregación de las combinaciones políticas había avanzado mucho en los cuatro años pasados. El aglutinamiento de nuevas

fuerzas como la Falange y el agrario-laborismo era otra complicación. Los socialistas aparecían separados de los comunistas, a raíz de luchas que habían mantenido al término de la Administración que se iba a reemplazar. Por su parte liberales y conservadores aparecían pugnando por designar sus propios candidatos. Resultante de estas contradicciones fue que el radicalismo se alió con comunistas, el liberalismo recibió apoyo de los socialistas y el conservantismo llevó candidato propio, apoyado por la activa Falange Nacional. Triunfó el primer bloque, eligiendo Presidente a D. Gabriel González Videla, en lucha con D. Eduardo Cruz Coke y D. Fernando Alessandri que eran los nombres levantados por conservadores y liberales.

La sagacidad política del Presidente electo le hizo ver desde el primer instante que era imposible gobernar en minoría nacional y apoyado por un partido de extrema izquierda como el comunista. Propuso entonces a liberales ingresar al Gobierno con tres Ministros, lo que aceptado por ellos creó un Gobierno sui generis, en que la tarea administrativa se complicaba debido a la agitación que los representantes comunistas en el Gabinete realizaban a través de los organismos del Estado. El efecto de esta acción se fue tornando francamente subversivo, porque los conflictos del trabajo se provocaban muchas veces por agentes oficiales y abarcaban producciones y zonas estratégicas. A raíz de graves trastornos, el Presidente de la República eliminó al Partido Comunista del Gabinete y llamó a colaborar a los conservadores, con lo que se organizó una fórmula ministerial radical-liberal-conservadora, en que ocupó como técnico la Cartera de Hacienda D. Jorge Alessandri. La agitación reinante en el país llevó a dictar la ley de Defensa Permanente de la Democracia, con la que se excluyó de la vida cívica al comunismo. Severas medidas adoptadas en virtud de ellas afectaron a dirigentes de ese partido. El país recuperó la normalidad y se emprendió una consciente política de restauración económica y freno a la inflación, que había alcanzado límites que llegaron a causar alarma. En el comienzo de la Administración González Videla se realizaron gestiones para firmar un tratado de unión económica con Argentina, que no prosperó debido a que se advirtieron las nacientes ambiciones imperialistas del régimen de Perón. El Presidente González Videla interpretó el sentir adverso de la opinión y no insistió en su tramita-

ción. Siguiendo la política de Aguirre Cerda, el Jefe del Estado viajó a la Antártida, en un acto de posesión soberana del territorio demarcado, que tuvo alcance político considerable.

Persistente impulso a los planes ya iniciados por la Corporación de Fomento llevó a terminar la usina de Huachipato, a crear la planta de minerales de Paipote, y a dar un desarrollo considerable a los planes eléctricos y del petróleo. En este período se inició también el Plan Chillán, con la venida al país de la Misión De Vries, que dio posteriormente origen a un Programa de Desarrollo Agrícola y de Transportes.

INFLACION Y DESCREDITO DE LOS PARTIDOS

Las severas contenciones al proceso inflacionista que alcanzaba a anunciar el Gobierno, determinaron diversas y variadas oposiciones, de izquierda y derecha. Ante la presión gremial el radicalismo juzgó conveniente cambiar la línea política y el Presidente de la República se vio obligado a desprenderse del Gabinete de Concentración Nacional, en febrero de 1950. La inflación no se desbordó de inmediato, puesto que en el referido año los índices se mantuvieron sin variaciones muy desfavorables, pero hacia el final del período un alud de iniciativas legales, en materias de reajustes automáticos, de remuneraciones y pensiones dio al proceso un carácter maligno. Los partidos políticos gobernantes —Radical y Falange Nacional— creyeron posible mantener su situación con las leyes en favor de los gremios, pero no fue así. La opinión en general, desencantada del fracaso económico, en el que aparecían comprometidos por igual todos los partidos políticos, manifestó una desilusión acerca de ellos y comenzó a volcarse en favor del mesianismo que aparecía ahora predicado por ex Presidente Ibáñez, quien aspiraba por cuarta vez a asumir el mando.

FLUCTUACIONES DE LA OPINION FRENTE A LOS PARTIDOS

Las oscilaciones pendulares de nuestra opinión pública pueden observarse a través de esta media centuria. Los partidos perdieron su prestigio en los tiempos de la dictadura, volvieron a recuperarlo con la restauración constitucional de 1932; luego con la lucha que originó el Frente Popular crecieron y se multiplicaron; volvieron a de-

caer debido a la división en la elección de 1946, y habían llegado a carecer nuevamente de verdadera autoridad al acercarse los comicios de 1952.

El fenómeno tuvo la virtud de realizar, por contraste, la candidatura antipartidista del ex general don Carlos Ibáñez que reapareció en escena con una precoz proclamación anunciada en Buenos Aires. En torno de su programa que ponía el acento en la autoridad y en la depuración de los hábitos políticos, comenzó a aglutinarse una gran masa de ciudadanos independientes y apreciables contingentes que se desprendían de los partidos.

Pronto se vio que la candidatura podía contentar a comunistas y socialistas y a nacionalistas y agrarios; en la larga y accidentada carrera de Ibáñez habían episodios ajustables a las más diversas ideologías y aspiraciones.

Los partidos políticos ante el peligro de una postulación cuyo telón de fondo podía ser otro golpe de Estado, no se unieron, sino que intentaron revalidar sus títulos, eligiendo personalidades sin tacha para representar sus programas. La derecha levantó el nombre de don Arturo Matte Larraín y el Partido Radical y la Falange, el de don Pedro Enrique Alfonso.

La extrema izquierda hizo una proclamación pro fórmula del senador Salvador Allende, pero ya un año antes de la elección se sabía que los efectivos socialistas y comunistas se volcarían en las urnas en favor de Ibáñez.

Con todo, los observadores políticos no calcularon el arrastre que tendría la candidatura de los sin partidos, que triunfó con una suma de votos superior a la de sus antagonistas en conjunto.

Muchos de sus partidarios pensaban que el Presidente electo se apartaría de las vías legales y procedería a dejar de lado las instituciones vigentes. Se equivocaron. El señor Ibáñez, con un recuerdo patente del final de su anterior Gobierno, decidió encuadrarse en las normas jurídicas, aunque no desperdiciaba ocasión para quejarse de las amarras legales y pedir la reforma de la Constitución para vigorizar más el Poder Ejecutivo.

La expectativa de una administración ordenada y competente se esfumó con rapidez debido a que entraron a los servicios públicos legiones de partidarios que no tenían experiencias; hasta los servicios más delicados, como el de Relaciones Exteriores,

fueron afectados por una racha de improvisación.

El Congreso, a pesar de su fisonomía de global oposición al régimen, le dio facultades para reformar la estructura administrativa, la que se aprovechó con muy desigual criterio. Así mientras se llevaba a la práctica el antiguo proyecto de Banco del Estado, que, pese a las discusiones, representaba una necesidad, se crearon múltiples corporaciones y se ampliaron otras, sin responder la mayor parte a objetivos orgánicos.

En uso de esas facultades, se fijaron salarios mínimos agrícolas y asignaciones familiares para ciertos sectores que no las disfrutaban.

Esta legislación por decreto estimuló grandemente el proceso inflacionista, que en los tres primeros años de la Segunda Administración Ibáñez elevó el costo de la vida con un ritmo que llegó al 80% en 1935.

Los resultados eran inesperados para quienes habían creído en que la sola instauración del nuevo Gobierno traería una baja del costo de la vida.

A la altura de 1954 la situación económica causó alarma y el Gobierno llamó al Ministerio de Hacienda a don Jorge Prat, adquiriendo la gestión financiera una fisonomía y las medidas económicas un carácter antiinflacionista. De esa época data la concepción del Banco Interamericano, que se planteó por la delegación chilena en la Conferencia Económica de Brasil.

Pero el alineamiento normal duraría poco, debido a que el Presidente Ibáñez tenía actuaciones impredecibles. Y así súbitamente puso término a la gestión de Ministros que habrían podido encauzar con seguridad las finanzas públicas, antes de que la situación se hiciera más grave.

Sin embargo, después que el Banco Central hizo una solemne advertencia para cambiar el rumbo económico so pena de ir a una falencia nacional, el Gobierno se decidió a marcar una breve tregua y requerir consejos técnicos. A fines de 1955 vino a Chile la Misión Klein-Saks, que entró a trabajar con el Banco Central y las Comisiones de Hacienda de las Cámaras. El Ministro de Hacienda, don Oscar Herrera, dispuso así de un comité asesor con el cual trabajó cerca de un año, sin interferencias del Ejecutivo. En esta labor los partidos Liberal y Conservador prestaron amplia colaboración. Los resultados fueron positivos y ha-

brian avanzado más firmemente si, andando los días, no hubiera vuelto a producirse la vacilación y el cambio. En efecto, el Ministro ya nombrado y su sucesor, don Eduardo Urzúa, tuvieron que afrontar toda suerte de obstáculos y sobresaltos para mantener cierta continuidad en la tarea de saneamiento.

La previsión admitía que las fuerzas políticas que así habían colaborado en un programa impopular, deberían recibir alguna consideración de parte del Gobierno. Ocurrió exactamente lo inverso. Al iniciarse la preparación de las elecciones presidenciales, en 1957, comenzó a marcarse franco apoyo del Presidente Ibáñez a los partidos de extrema izquierda, que habían contribuido a desorganizar la vida económica.

Uno de los últimos pasos de este Gobierno fue reincorporar al comunismo a la vida cívica.

En el campo internacional, la Segunda Administración Ibáñez se señaló por el acercamiento a Bolivia, desprendiéndose de él un trato preferencial a la ciudad de Arica; por la fracasada gestión con el Gobierno justicialista de Perón, que propuso a Chile un tratado de complementación política y económica, y por complicaciones en el problema de límites con Argentina; frente a Estados Unidos hubo una situación fría y distante y con el resto del Continente no se registraron acontecimientos dignos de mención.

LAS ELECCIONES DE 1958

Un hecho que seguramente sorprenderá a los que en el futuro analicen los fenómenos políticos, es que transcurrieran los seis años sin que los partidos pudieran llegar a combinar sus fuerzas de modo de presentar batalla en las urnas dentro de formaciones equilibradas. Cuatro candidaturas importantes reclamaron los votos de la ciudadanía: la independiente de D. Jorge Alessandri; la radical, la demócratacristiana y la comunista-socialista.

El desarrollo de los comicios y su desenlace no requieren comentarios porque los acontecimientos son de ayer. El prevalecimiento de la candidatura independiente se debió al aporte de votos conservadores, liberales y de electores no afiliados a partidos. Indirectamente influyó en contra de la candidatura de izquierda el mantenimiento de otra postulación de esa tendencia.

Dos años van transcurridos desde la elección del Gobierno de D. Jorge Alessandri y sus hechos y realizaciones no encuentran cabida en la apreciación de administraciones pasadas.

Hay que registrar, sin embargo, que en este período, afrontando gravísimos problemas económicos, algunos de ellos, como la inflación, en gran parte dominados, el estado cívico de la nación es excepcionalmente tranquilo y no ha reclamado en ningún momento la supresión de garantías constitucionales, que eran antes tan frecuentes.